



ARTICULISTA INVITADO

**JORGE ROMERO
HERRERA***
@JorgeRoHeReforma electoral: reto,
eliminar la injerencia del crimen

En México, el camino a la democracia nunca ha sido fácil; tardó décadas y se transitó entre sangre y lucha. Las reformas electorales nunca fueron concesiones del poder. Fueron resultado de la presión ciudadana, la inconformidad legítima y la necesidad de construir reglas que impidieran que el gobierno se adueñara de las elecciones. Cada paso que dimos durante muchos años tuvo un mismo objetivo: que quien gobierna no sea juez y parte. Y que el poder no se perpetúe.

Por eso nos preocupa —y mucho— el rumbo que hoy se intenta imponer desde el oficialismo. No estamos ante una discusión técnica ni ante un simple rediseño administrativo. Lo que se pretende es alterar el equilibrio del sistema electoral en un momento particularmente delicado para el país: con instituciones bajo presión, con violencia política normalizada y con una infiltración criminal que ya no puede seguir tratándose como un tema marginal.

Desde Acción Nacional nunca nos hemos cerrado al diálogo. Al contrario. Creemos que la política democrática se construye hablando, contrastando ideas y escuchando a quienes piensan distinto. Pero dialogar no significa aceptar retrocesos ni callar frente a riesgos evidentes.

Nadie puede negar que México necesita una reforma electoral, pero necesita una que fortalezca a la ciudadanía, no una que concentre poder. Como la que se pretende imponer y que denominamos Ley Maduro, por su similitud. Una reforma que cuide al árbitro electoral, no que lo debilite. El INE no es un obstáculo; es una garantía. Su autonomía, su capacidad técnica y su presencia territorial son condiciones mínimas para que las elecciones sigan siendo confiables. Quitarle recursos, cargarle más tareas o intentar someterlo políticamente no es moderni-

zar el sistema: es ponerlo en riesgo.

Pero hay un tema que ya no admite evasivas, por obvio y peligroso: la relación entre política y crimen organizado. Las elecciones más recientes dejaron una huella clara de violencia, intimidación y control territorial. Fue un patrón perfectamente documentado. Y mientras no se asuma con seriedad, cualquier reforma electoral será incompleta y profundamente irresponsable.

Por eso he planteado un reto: ¿Se está dispuesto a que una elección se anule cuando se pruebe la intervención del crimen organizado? ¿Se está dispuesto a que un partido pierda su registro si se acredita que se financió con dinero ilícito?

Defender la representación proporcional forma parte de la misma lógica democrática. No se trata de privilegios ni de cuotas partidistas. Se trata de pluralidad. Un Congreso que no refleje la diversidad del país es un Congreso que deja fuera a millones de personas. Fabricar mayorías artificiales puede servir para imponer decisiones, pero debilita a la República y cancela los contrapesos que evitan abusos.

Aquí no está en juego una ley más. Está en juego la posibilidad de que las próximas generaciones vivan en un país donde votar tenga sentido, donde competir no implique miedo y donde perder una elección no signifique quedar excluido del sistema. Defender la democracia no es defender a un partido. Es defender el derecho de la gente a elegir, a disentir y a cambiar de rumbo cuando así lo decida.

Poner límites al poder no es radicalismo. Es responsabilidad democrática. Y frente a este momento, no hacerlo sería fallarle al país. Por eso, Acción Nacional no se va a rendir, desde las cámaras de diputados y de senadores participaremos con propuestas claras y viables. 🗳️

***Persidente del PAN**